

Chile: la ofensiva política de la dictadura

Gabriel Gaspar Tapia

Antecedentes

EL 11 DE SEPTIEMBRE del recién pasado 1987, la dictadura chilena cumplió catorce años de haberse instalado en el poder y, pese a las múltiples manifestaciones de descontento de la mayor parte de la población, a una situación económica crítica y a un cuasi unánime repudio internacional, aún permanece con capacidad suficiente como para mantener la iniciativa en el proceso político del país. ¿Cómo se explica que el régimen militar haya logrado sortear la intensa acción que la oposición desarrolló entre los años 1983 y 1986?; ¿por qué se mantiene Pinochet? ¿Es con sólo la fuerza de las armas que puede preservarse en el poder? Las presentes notas intentan reseñar el acontecer político-social chileno en la reciente coyuntura, buscando responder las anteriores interrogantes.

Para nadie son desconocidas las circunstancias que caracterizaron el ascenso al poder del actual gobierno militar chileno. El brutal fin de la experiencia de la Unidad Popular y la inmolación del presidente Allende fueron rasgos que pusieron de relieve uno de los objetivos más nítidos e indesmentibles del golpe militar: se trataba de poner alto al intento de transformación social que desarrolló el pueblo chileno en los mil días del gobierno allendista. Por lo anterior, en un primer momento resultó evidente caracterizar al pronunciamiento militar como una operación defensiva de las clases dominantes chilenas, como una acción contrarrevolucionaria que intentaba dismantelar la amenaza social que representaba el gobierno y los partidos de la Unidad

Popular. Este carácter reaccionario del golpe militar y el papel hegemónico del gran capital al interior de la alianza social que lo respaldó, dieron fácil paso a la caracterización del nuevo régimen como uno de corte fascista. Sin pretender adentrarnos en una polémica ya superada, es evidente a estas alturas que el régimen militar no se caracterizaría sólo por sus rasgos reaccionarios.¹

A pocos años de instalado (específicamente desde 1975) se intentará en Chile un audaz y salvaje proceso de modernización capitalista que se guiará de manera ultraortodoxa por las recomendaciones de la escuela neoliberal. La política económica que adoptará el gobierno militar buscará insertar de nueva manera a Chile en la economía internacional. La crítica al papel estatizante de la gestión económica del gobierno allendista se insertó en una concepción más global de privatización de la economía y de apuesta al libre juego de las leyes del mercado. Por lo tanto, la crítica de los economistas neoliberales abarcaba también al modelo de desarrollo económico que el país había adoptado a partir de los años cuarenta: la industrialización orientada al mercado interno.

Reduciendo en forma drástica la participación estatal en la economía y abriendo las fronteras en forma indiscriminada a la inversión y al comercio exterior, en pocos años se sometió a la industria nacional a una competencia que, en corto tiempo, liquidó a la mayoría de las empresas que habían surgido al calor del proceso de sustitución de importaciones.² La filosofía económica que inspiraba la operación se basaba en la necesaria (a juicio de sus impulsores) puesta al día del parque productivo nacional, eliminando los subsidios y aranceles proteccionistas que amparaban a una industria atrasada tecnológicamente y acostumbrada al alero estatal.³

¹ En efecto, a mediados de los setenta se desarrolló una polémica en relación al carácter de los nuevos regímenes militares. Agustín Cueva planteó que lo esencial de las dictaduras lo constituía su rasgo fascista; esta propuesta fue rebatida, entre otros, por Atilio Borón; Luis Maira por su parte recalcó que se trataba de regímenes de seguridad Nacional y Guillermo O'Donnell planteó su tesis de que se trataban de estados burocrático-autoritarios. Ver *El control político en el Cono Sur*, Siglo XXI Editores, México, 1977.

² El impacto de la competencia extranjera afectó en particular a las industrias textil, metalmecánica, automotriz y, como efecto derivado, de la construcción.

³ Una sistemática orientación la encontramos en la "Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública", hecha por el ministro Sergio de Castro. Ver versión en *Boletín del Banco Central de Chile*, enero de 1978.

Chile debía dar paso a un nuevo esquema productivo que pusiese el énfasis en aquellos productos en los cuales el país contaba con ventajas comparativas. Al mismo tiempo, la derrota política de la clase obrera creaba condiciones para dismantelar el amplio sistema de seguridad social construido en las décadas precedentes y, junto a ello, merced a los elevados niveles de represión, se pudo imponer a la fuerza de trabajo condiciones de explotación sin precedentes en el pasado inmediato.

Las clases dominantes chilenas tenían ante sí la posibilidad de reorganizar el aparato productivo sin, ahora, la molesta presencia que en el pasado le significó un poderoso y clasista movimiento obrero. La reorganización productiva que se acompañó de autoritarismo político fue el rasgo predominante del modelo de sociedad que ambicionaba el régimen militar. Paulatinamente, el capitalismo chileno empezó a orientarse hacia actividades de exportación, las cuales, si bien experimentaron un notorio incremento, no lograron ni atraer sustantivamente a la inversión extranjera ni generaron suficiente empleo que remplace de manera eficiente la cesantía que originó el dismantelamiento industrial y la reducción de la burocracia. La economía chilena empezó a funcionar con elevados niveles de desempleo y empobrecimiento generalizado de la población asalariada. Los economistas del régimen argüían que ello era parte de un inevitable y transitorio costo social del modelo impulsado. La represión político-social unida al temor del desempleo fueron algunas de las principales armas que el régimen esgrimió para inhibir al movimiento obrero. La afluencia de crédito externo —que fue mayoritariamente utilizado en consumo suntuario—, la extraordinaria concurrencia de productos importados, el incremento de la productividad y una relativa diversificación de exportaciones (en especial en el sector agroindustrial: frutas, vinos, productos del mar, papel y celulosa) fueron presentados por el gobierno como un prometedor *boom* que requería de una sociedad “despolitizada”, único marco posible para estimular el libre desenvolvimiento de las leyes del mercado.

El optimismo del régimen se resquebrajó a partir de diciembre de 1981. Al haberse tornado Chile a una economía más integrada al capitalismo mundial también se hizo más vulnerable a los vaivenes de éste. Estructuralmente Chile era más dependiente. El incremento de la internacionalización del mercado inter-

no había dismantelado los fundamentos de autonomía que laboriosamente se habían ensayado en el pasado.

El fracaso del modelo neoliberal en 1981-1982 creó condiciones para un cambio cualitativo del escenario político. La protesta se tornó pública y de masas. A la tenaz resistencia obrera de los años anteriores se sumaron en forma paulatina grandes sectores medios e incluso fracciones del empresariado. Políticamente, este movimiento maduró a partir de 1983, año en el cual, en las denominadas Jornadas Nacionales de Protesta, la inmensa mayoría de la población chilena empezó a manifestar su descontento.

El incremento de la actividad opositora se expresó también en el plano partidario. Los partidos políticos, tanto del centro como de la izquierda, se nutrieron de la actividad social y buscaron construir conglomerados multipartidarios que permitiesen la acción conjunta de la oposición. En 1983 surgirán dos agrupamientos de este tipo: la *Alianza Democrática* (AD) y el *Movimiento Democrático Popular* (MDP).

La AD representaba, en lo fundamental, a la opción centrista de la oposición que tenía como eje al Partido Demócrata Cristiano (PDC). La coalición que este partido logró estructurar involucraba al Partido Radical (PR) y a sectores políticos pequeños, tanto de derecha como de izquierda. Su estrategia se basaba en un incremento de la movilización social para obligar al régimen a entablar negociaciones a fin de acordar una transición del país hacia la democracia. En septiembre de 1983 la Alianza logró sentar a la mesa de negociaciones al Ministro del Interior a quien se planteó como condición para el diálogo la renuncia del dictador. El diálogo no contribuyó a crear un camino de transición democrática pero sí creó dificultades con el resto de la oposición.

El MDP aglutinó a la mayoría de las organizaciones de la izquierda chilena. El partido comunista tenía en su interior un peso cualitativo de primera importancia. La influencia comunista se reforzaba por la dispersión del socialismo en diversas tendencias y por el influjo de su política de "violencia aguda", como denominaba Corvalán (Secretario general del PCCH) a la estrategia de "combinar todas las formas de lucha", incluidas las armadas.⁴

⁴ A inicios de los ochenta, los comunistas chilenos realizaron un viraje en su línea política al incorporar en su estrategia elementos de lucha armada y reivindicar el "legítimo derecho a la violencia" contra la dictadura.

A pesar de las diferencias estratégicas, ambos agrupamientos tenían objetivos comunes: poner fin a la dictadura, abrir un proceso democrático y basarse para ello en la movilización social. Sobre dichas bases se operará una concertación opositora que irá en ascenso en los años siguientes. 1984 y 1985 serán años de ascendente movilización opositora y de reanimación de la sociedad civil, luego de una década de férreo control autoritario.

De esta forma, la oposición se caracterizó por operar en estos años en torno a una alianza tácita, una coincidencia entre el centro y la izquierda, en medio de una amplia movilización social. La Iglesia católica desempeñó un papel destacado como articulador de la oposición. El Comando Nacional de Trabajadores y posteriormente la Asamblea de la Civilidad constituyeron los referentes sociales que alcanzaron una capacidad de convocatoria reconocida por la base social de la oposición.⁵ Detrás de la Asamblea se constituyó un Comité Político Privado que agrupaba a los más importantes partidos democráticos.⁶

1986 se presentó como un año en el cual se desarrollarían acciones cruciales por la democracia en el país. El régimen militar trataba de realinear el cuadro político en torno a un eje “democracia vs. comunismo”, intentando con ello reconstruir la alianza político-social que derrotó a la izquierda en 1973 y avanzar hacia su cronograma institucional que fijaba elecciones para 1989. La oposición colocaba el acento en la contradicción “democra-

⁵ Luego de años de repliegue, el movimiento sindical logró estructurar una forma unitaria en la cual reconocieron filas el sindicalismo democristiano y el izquierdista: se trataba del Comando Nacional de Trabajadores. En un primer momento, la Confederación de Trabajadores del Cobre sirvió de aglutinante de este Comando y dos líderes democristianos se transformaron en sus principales dirigentes: Roberto Seguel y Manuel Bustos.

⁶ La Asamblea de la Civilidad se constituyó con base en una confluencia de diversas organizaciones: la mayoría de los colegios profesionales, el Comando Nacional de Trabajadores y las más importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos. Socialmente representaba a la mayoría de los sectores medios y asalariados organizados del país; en términos político-partidarios, la Asamblea de la Civilidad constituyó un frente común donde convergieron los partidos de la Alianza Democrática (liberales republicanos, demócrata-cristianos, radicales y una tendencia socialista) y del Movimiento Democrático Popular (socialistas, comunistas, y miristas); la Izquierda Cristiana, que formalmente no pertenecía a ninguno de estos conglomerados, también se adhirió a la Asamblea. Todos estos partidos constituyeron el “Comité Político Privado” que coordinó la presencia y acción de estas diversas organizaciones. Las últimas jornadas de protesta fueron convocadas por la Asamblea de la Civilidad. Con posterioridad al paro de julio de 1986, la dirección de la Asamblea fue encarcelada por el régimen.

cia vs. dictadura'. El partido comunista llamó a 1986 "el año decisivo".

El paro nacional de julio de 1986, el atentado contra Pinochet y la visita del Papa: tres coyunturas de desestabilización

En el periodo que va desde el paro nacional de julio de 1986 a la visita papal de abril de 1987, la oposición se jugará a fondo para retomar la iniciativa en el proceso político, romper el cronograma de transición que el régimen prometía para 1989 y posibilitar una salida democrática.

El paro de julio de 1986 constituyó una de las más grandes manifestaciones de descontento social y político contra la dictadura. Convocado por la Asamblea de la Civilidad, reunió a la mayoría de las organizaciones sociales en una masiva demostración de protesta. En el plano partidario el paro fue apoyado por sectores de la derecha republicana, los partidos de centro y la totalidad de las fuerzas de izquierda. En términos sociales, representó una movilización que involucró a amplios sectores medios, comerciantes, transportistas, estudiantes, amas de casa y colonos. Si bien no logró traducirse en un paro productivo (debido en gran parte al fantasma del desempleo para quienes lo apoyasen abiertamente) era evidente que la clase obrera respaldó decididamente esta movilización, en particular en la protesta nocturna que, en torno a los lugares habitacionales, transformaron a las comunas populares de Santiago, Valparaíso y Concepción en zonas donde empezaron a manifestarse formas embrionarias de autodefensa de masas, en gran parte dirigidas por las organizaciones izquierdistas. La tropa reprimió con violencia estas manifestaciones.⁷

Pese a su amplitud y combatividad, el paro no logró concretar una operación política que le permitiese capitalizar la movilización. La explicación principal recae en la falta de concertación entre los partidos, a causa de la aparición de discrepancias. El partido demócrata cristiano explica que esta fractura se de-

⁷ El paro nacional, al igual que las protestas anteriores arrojaron un alto número de detenidos, heridos y muertos. Patrullas del ejército llegaron al extremo de quemar vivos a dos jóvenes fotógrafos.

bió en gran medida a la imposibilidad de concertar una salida democrática con el partido comunista debido a la línea política de este último. A juicio de los democristianos, la política insurreccional de los comunistas demostraría su carácter de fuerza no democrática al mismo tiempo que alimentaría y legitimaría la represión del régimen. Los comunistas chilenos, por su parte, precisarían que la democracia cristiana provocó el quiebre, al abandonar el Comité Político Privado que coordinaba a la oposición, abandono que fue previo a las denuncias del régimen del hallazgo de arsenales y del atentado contra el general Pinochet.⁸

Es muy temprano para poder establecer responsabilidades históricas. Lo cierto es que, independientemente de las explicaciones que la coyuntura pueda ofrecer, en todo este periodo se manifestará el cruzamiento de dos contradicciones que caracterizan a la sociedad chilena: la contradicción en torno al régimen político y la contradicción que se configura alrededor del régimen económico-social.⁹

En efecto, a primera vista es evidente para cualquier análisis que la sociedad chilena vive una aguda contradicción en torno al régimen político. Ésta se expresa en la dicotomía democracia-dictadura. El arco democrático del país abarca a un conglomerado social y político mayoritario y cuenta con un amplísimo respaldo internacional. Pese a la nitidez de esta contradicción es posible observar que la acompaña una contradicción en torno al régimen económico-social. Al acentuarse el carácter excluyente y contradictorio del capitalismo chileno como producto de la experiencia neoliberal de los años setenta, se han incrementado las tensiones entre el bloque de fuerzas en el poder y el conjunto de clases y fuerzas sociales excluidas del actual pacto de dominación. Sería excesivo caracterizar a este tipo de contradicción con los signos de capitalismo-socialismo, pero es indudable que para un amplio sector de la población chilena, parti-

⁸ En agosto de 1986 el gobierno militar denunció el hallazgo de voluminosos arsenales destinados, según la inteligencia castrense, al partido comunista y al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Al descubrimiento de los arsenales (sobre cuyo volumen mostró incredulidad una parte de la opinión pública) prosiguió una fuerte campaña represiva. La democracia cristiana culpó de estos hechos a los comunistas y su línea política de "violencia aguda".

⁹ Esta tesis ha sido sostenida en forma sistemática por Rodrigo Baño en los boletines de *Análisis de Coyuntura* que elabora en conjunto con un grupo de analistas en Santiago.

cularmente el popular, la lucha contra la dictadura involucra la satisfacción de un tipo de demandas que desborda los márgenes de una lucha constreñida en forma exclusiva a la modificación del régimen político. La satisfacción, aun parcial, de las demandas sociales requiere en forma necesaria de algún tipo de reorganización estructural que, a lo menos, garantice la atención de necesidades tan básicas como la alimentación y el empleo.

La emergencia de este tipo de aspiraciones se tornó nítida en las Jornadas Nacionales de Protesta y causó, sin quererlo, una aprehensión en sectores de la oposición moderada que vislumbraron en la movilización popular el renacer de la amenaza social, acompañada ahora de una política de perspectivas rupturistas de un importante sector de la izquierda. Creemos que la división del arco opositor tiene explicaciones más estructurales basadas más en este tipo de tensiones que en causas de corte coyuntural.

El paro nacional de julio significó la movilización social cívica más grande y al mismo tiempo mostró sus límites. La siguiente coyuntura la marcó el impacto del atentado contra el general Pinochet realizado por unidades del FPMR en septiembre de 1987. El operativo del FPMR buscaba desencadenar una vasta movilización democrática que, al descabezar el mando de la dictadura, pusiese en tensión a toda la oposición y posibilitase una salida democrática para el país. Al fracasar el intento, y reemplazo el régimen de la sorpresa inicial, inició un virulento contraataque que se expresó en la promulgación del estado de sitio, en la persecución y asesinato de numerosos líderes y cuadros de la oposición. La lucha democrática experimentará un progresivo reflujo, del cual se saldrá parcialmente con ocasión de la visita del Papa a comienzos de 1987.

La visita papal permitió una manifestación masiva y multitudinaria de la mayoría nacional contra la dictadura. También mostró la diversidad de intereses que se jugaban alrededor de la presencia de Juan Pablo II. El régimen buscaba legitimarse internacionalmente con la presencia del Pontífice. Pinochet lo recibió con discursos en que se buscaba coincidir con Wojtyla en una cruzada mundial contra el comunismo. La Iglesia católica chilena aspiraba a que la presencia vaticana respaldase su gestión humanista y sus esfuerzos democráticos de estos años. Sectores de la oposición moderada aspiraban una vez más a que la

influencia de los factores externos cargase la balanza de fuerzas hacia una salida democrática. La mayor parte de la población buscó expresar su descontento. Así, los principales actos públicos que contaron con la presencia papal fueron interrumpidos por la policía y se transformaron en ruidosas manifestaciones de repudio al régimen. El acto más importante, realizado en el Parque O'Higgins en Santiago, culminó con un intenso apaleo de los fieles por parte de los carabineros y el Papa, en medio de las humaredas de las bombas lacrimógenas lanzadas contra la multitud, llamó a la reconciliación nacional.

Concluida la visita papal, el país asistirá a un periodo en el cual el régimen impulsará con vehemencia su programa de institucionalización que prevé una renovación del mandato presidencial para 1989, previa consulta electoral, la cual, merced a la Constitución vigente, consiste en la designación de un candidato único propuesto por la Junta de Gobierno (los cuatro comandantes en jefe) al electorado nacional.

Visto en perspectiva, podemos señalar que en esta coyuntura culmina una fase del proceso político chileno que estuvo caracterizada por una vasta movilización social que tenía como objetivos centrales retomar la iniciativa política, quebrar el cronograma electoral del régimen e imponer una transición democrática. De una u otra manera, cada una de las coyunturas señaladas (el paro de julio, el atentado y la visita del Papa) estuvieron sesgadas por el predominio en su interior de algunas de las diferentes estrategias propuestas en el seno de la oposición. Después de ellas, el resultado parcial era la permanencia del régimen que se atrevía ahora a desafiar a la oposición a una consulta electoral. Una sensación de desánimo e impotencia cruzó el movimiento democrático.

La observación de estos fenómenos dará lugar a una intensa polémica al interior del arco democrático. En forma quizás precipitada, desde diversos ángulos se sacarán conclusiones demasiado rotundas: para unos había fracasado la estrategia de la movilización social;¹⁰ la oposición en general, y la izquierda en particular, insistía en formas de movilización basadas en la agi-

¹⁰ Una elaborada posición al respecto la asumió José Joaquín Bruner, cuyas reflexiones fueron ampliamente difundidas entre los medios opositores e incluso en periódicos de circulación nacional.

tación, que permitían desahogos coyunturales de protesta pero que no lograban alcanzar una permanencia y continuidad suficientes para desestabilizar el régimen. Desde posiciones opuestas se refutaba este tipo de interpretaciones argumentando que lo que reflejaba el examen de los hechos era que el camino de la negociación con el régimen estaba agotado; mejor dicho, que nunca había sido un camino para una salida democrática.¹¹ En sectores de la izquierda, en particular en el Partido Socialista, tendencia Núñez, lo que había conducido al fracaso de la oposición en gran parte era la militarización de la política que había provocado el accionar del partido comunista que, con ello, colocaba el enfrentamiento con la dictadura en el terreno en que ésta era más fuerte al mismo tiempo que con su radicalismo erosionaba la unidad de las fuerzas democráticas.

Con todo, lo que es posible comprobar con posterioridad a la visita papal, luego de un periodo de intensa actividad opositora por quebrar el cronograma de institucionalización del régimen, es que éste logró sortear los desafíos y asumió con fuerza la orientación del proceso político imponiendo como eje del mismo al tema de las elecciones de 1989.¹²

La ofensiva política de la dictadura

Desde principios de 1987, el régimen avanzó en forma decidida en la consecución de su programa de institucionalización. Dictó una severa ley de partidos políticos, la que le permite excluir de la futura legalidad a las principales organizaciones izquierdistas. Al mismo tiempo convocó a la población a inscribirse en los registros electorales.¹³ La oposición aún no concertaba una estra-

¹¹ Tesis sostenida por Clodomiro Almeyda en una sesión de análisis de las tesis de Bruner y de examen coyuntural efectuada en México en octubre de 1986, donde participó el autor de estas notas.

¹² El régimen ha sido confuso respecto al carácter de las elecciones de 1989; inicialmente habló de plebiscito y la oposición le demandó elecciones libres (más de un candidato) y, últimamente, el general Pinochet ha insistido en que no se trata de elecciones sino de una "consulta electoral".

¹³ Según la Ley de partidos políticos, no podrán participar en la futura institucionalidad aquellas organizaciones que se declaren marxistas, lo cual inhabilita al partido comunista, a la mayoría de las tendencias socialistas, al MAPU y al MIR. Con benevolencia en la interpretación de esta ley podría pensarse que la izquierda cristiana, el Partido Socialista-Núñez y el radicalismo de izquierda podrían ser admitidos.

tegia común para enfrentar esta ofensiva y se debatía entre variadas fórmulas, ninguna de las cuales alcanzaba pleno consenso. El problema central era el clásico dilema de participar, pagando con ello el precio de legitimar el sistema, u optar por la independencia y la denuncia, arriesgándose a quedar fuera de uno de los sucesos políticos más importantes que se avecinaban.

Hasta el 31 de agosto de 1987 se habían inscrito poco más de dos millones de personas, en su mayoría (particularmente el primer millón de inscritos) pertenecientes a una base social de derecha. Según encuestas de centros de opinión pública no oficiales, los sondeos realizados en junio en el área metropolitana arrojaban un 15% que no se inscribiría por ningún motivo, un 65% que sí lo haría en algún momento y un saldo que se mostraba indeciso. Cabe advertir que mientras más bajo fuera el porcentaje de inscritos, mayores posibilidades tendrían el régimen de ganar las elecciones.¹⁴

En otras palabras, ante la vacilación de la oposición frente a la ofensiva de la dictadura y en el actual cuadro de fuerzas, de ser hoy día las elecciones, el régimen tiene una alta probabilidad de ganar en la consulta.

Pese a la afirmación anterior, es posible detectar dos elementos que podrían contribuir a que el general Pinochet no sea legitimado por ocho años más. Nos referimos por una parte a las contradicciones internas del régimen, y de otra, a la actuación de la oposición.

El primero de estos elementos es el que hegemoniza tácticamente el escenario político chileno en los meses inmediatamente posteriores a la visita papal. Sobre la base de un acuerdo, el de asegurar la continuidad del régimen, las opiniones al interior de la Junta Militar (integrada por los cuatro comandantes en jefe de las ramas de la Defensa Nacional) se encuentran divididas entre

¹⁴ La mayoría de los sondeos de opinión pública asignan un 20% del electorado ubicado en posiciones conservadoras, la mayor parte de los cuales respalda la gestión del gobierno militar; las recientes elecciones del Colegio de Profesores revelan el mismo dato. Con un universo de inscritos que no sobrepase los tres millones, la derecha podría aglutinar una mayoría relativa. Superado ese margen sus posibilidades decrecen rápidamente; los analistas especializados calculan que podrían inscribirse cerca de seis millones de electores. Si hubiese más de un candidato ganaría claramente el de la oposición. La mayor parte de los datos electorales los hemos sacado del reporte de *Diagnos* correspondiente al mes de junio y presentado en el taller de coyuntura del Instituto del Nuevo Chile, Santiago, donde participó el autor.

quienes piensan que la continuidad se preserva con la candidatura del general Pinochet y quienes piensan que para lograr la continuidad se necesita un candidato civil.¹⁵

Naturalmente, el Ejército de tierra, la principal rama, propugna la candidatura de Pinochet. Éste se ha embarcado en una decidida campaña proselitista y recorre el país con un discurso en que las nociones de orden y estabilidad social son las predominantes. Por cierto, están teñidas de un lenguaje anticomunista con el cual intenta captar la adhesión parcial de aquellos sectores que, sin ser progubernistas, se encuentran temerosos de un horizonte de "salvadorización" del país. Ayuda a esta campaña una reanimación de la economía en el último tiempo que se traduce en una merma del nivel de desempleo.

No debe entenderse que lo anterior es la opinión unánime entre la oficialidad. Pinochet ha debido llamar a retiro a aquellos altos oficiales que manifestaban dudas respecto a la candidatura del actual gobernante;¹⁶ el incidente del mayor Fernández Larios (activo "terrorista" de los servicios de inteligencia del régimen que, para salvar su situación, se entregó a la justicia norteamericana por su participación en el asesinato de Orlando Letelier) también obligó al dictador a preocuparse de los niveles de legitimidad con la oficialidad. Una observación preliminar nos indica que, pese a estos incidentes, en la actualidad el mando del ejército se encuentra férreamente aglutinado en torno a la candidatura pinochetista.

Otra es la opinión de la Fuerza Aérea y de la Armada. Allí, por razones diversas, se ha arribado a una posición institucional (vale decir, que no depende de la persona de los actuales comandantes en jefe sino que permea a la mayor parte de la oficialidad) que coincide en la necesidad de que las Fuerzas Armadas operen en 1989 un repliegue de las posiciones que actualmente

¹⁵ Sin lugar a dudas, el debate dentro las Fuerzas Armadas sigue constituyendo la "caja negra" de la política chilena. Pese al hermetismo, los diferentes miembros de la Junta de Gobierno han manifestado contradicciones con respecto a quién debería ser el candidato que propongan a consulta. La discreción unida a la eficacia de la contrainteligencia militar limita severamente el contacto entre las direcciones de los partidos y la alta oficialidad.

¹⁶ En septiembre de 1986 Pinochet llamó a retiro a los generales Danús y Frez que habían sido identificados como partidarios de una transición política. En los primeros meses de 1987, sin motivos aparentes, llamó a retiro al jefe del Estado Mayor, general Alejandro Medina.

ocupan en la cúspide del aparato estatal. Para ello han declarado expresa y públicamente que desean un candidato civil el cual, a estas alturas, tiene nombre y apellido: el ex canciller Cubillos.¹⁷ En la perspectiva del sector castrense, un candidato civil permitiría recomponer la unidad de las Fuerzas Armadas, obtendría el apoyo mayoritario de todos los sectores de la derecha y podría incluso atraer a un sector de la oposición moderada (concretamente a la democracia cristiana) a participar en el sistema político que el régimen intenta estructurar con posterioridad a 1989.

Un análisis más profundo podría arrojar luces sobre el posible vínculo entre estas discrepancias y los énfasis y matices que expresan las diversas fracciones del bloque social dominante. Lo que emerge a la superficie son las diferencias entre las distintas ramas de la defensa nacional. Dentro de este complejo (y poco analizado) juego de conflictos y tendencias internos del bloque en el poder, destaca la labor del gobierno norteamericano.¹⁸ Sobresale la acción del Departamento de Estado que, en múltiples oportunidades, ha manifestado que miraría con simpatía un proceso de apertura política en el país que evitara que las contradicciones sociales conduzcan a una situación favorable al crecimiento de opciones insurreccionales.¹⁹ Un sector de la oposición apues-

¹⁷ En junio de 1987, el almirante José Toribio Merino, en declaraciones a la prensa santiaguina realizó un verdadero retrato hablado de quién, a su juicio debería ser el candidato propuesto por la junta militar. Las señas conducían a la persona del ex canciller Hernán Cubillos; días después, el comandante en jefe de la FACH realizaba declaraciones similares, aunque con mayor discreción; el periódico de oposición *Fortín Mapocho* aprovechó la oportunidad para titular: "Pinochet pierde 2 X 0 en la Junta".

¹⁸ Estamos lejos de interpretar que la opinión del gobierno de Reagan es monolítica respecto al gobierno chileno. Para ciertos sectores del Pentágono, el régimen de Pinochet es un aliado seguro en el Pacífico Sur, a la burocracia del Departamento de Estado preocupa más que en el Cono Sur no emerja otro El Salvador y concentra su atención en la necesidad de democratizar; el Departamento del Tesoro y los organismos financieros colocan al gobierno chileno como un ejemplo de la nueva racionalidad económica que es necesario implantar en América Latina. La opinión que hemos reseñado es la que corresponde más al Departamento de Estado; los funcionarios encargados de formular la política hacia Chile han sido homogéneos en la línea descrita: es el caso del secretario adjunto para América Latina, Elliot Abrams, del subsecretario adjunto Robert Gelbart y del propio embajador norteamericano en Santiago, Harry Barnes. Los roces no han sido menores y muchas veces los miembros de la Junta Militar se han negado a recibir a los diplomáticos norteamericanos, como le ocurrió a Gelbart en septiembre de 1987.

¹⁹ La embajada norteamericana invita frecuentemente a sus actividades a los dirigentes de la oposición y organiza con cierta regularidad viajes de dirigentes y mandos

ta, con mucha esperanza, a que la presión norteamericana pueda conducir a una apertura y los contactos de la embajada norteamericana en Santiago con los líderes de la oposición, en particular de los sectores más moderados, son del conocimiento público. Sin embargo, la experiencia de estos años indica que mientras el gobierno norteamericano no tenga garantías de que una apertura política conducirá a una situación gobernable, no va a emplearse a fondo para presionar la salida del actual gobernante. Este último, por su parte, ya sabe cómo inmunizarse en lo interno ante un aislamiento internacional.

La tendencia que acabamos de reseñar, la de un sector de las fuerzas armadas dispuestas a llegar sólo hasta 1989 en el control del aparato de gobierno, no debe confundirse con una "tendencia democrática" al interior del régimen. Los propios comandantes de la FACH y la Armada han sido enfáticos al señalar que, si bien propugnan un candidato civil también son partidarios de excluir expresamente a la izquierda de la futura institucionalidad. La actual Constitución provee para ello de suficientes subterfugios y de este modo el general Matthei y el almirante Merino compiten con Pinochet en proclamas anticomunistas, requisito indispensable para ganar audiencia en las filas uniformadas. Esta opinión también es compartida por los agrupamientos de derecha, como es el caso del llamado Partido de Renovación Nacional.

En nuestra opinión, esta contradicción interna del régimen —la cual no ha excluido golpes bajos—²⁰ es la que hoy predomina en el escenario coyuntural, alentada por la ausencia de una política común de parte del arco democrático. Si bien es una contradicción en el seno del bloque dominante, no debe interpretarse como un proceso de largo aliento y deberá ser resuelto en el

medios de los partidos de oposición a Estados Unidos. En el arco de las invitaciones han participado miembros de la derecha republicana, del radicalismo, de la democracia cristiana e incluso del Partido Socialista-Núñez. El autor de estas notas, al entrevistar a personas que han participado en dichas giras, ha logrado detectar que las invitaciones tienden a privilegiar a líderes políticos, dirigentes sindicales e intelectuales, a quienes se les muestran las características del sistema político americano.

²⁰ A mediados de junio, cuando el general Matthei, a la vez que desmentía su participación en una reunión secreta en Bonn con el general Stange (jefe de carabineros) y funcionarios norteamericanos, reafirmaba su criterio de que el candidato que propusiese la Junta Militar debía de ser un civil, manos oficiosas deslizaron en el principal periódico del país una nota en las páginas sociales donde se divulgaba el nacimiento de un bebé, sugiriendo que era producto de relaciones extraconyugales del comandante de la Fuerza Aérea, lo cual no pudo ser desmentido por el implicado.

periodo inmediatamente próximo. Hasta el momento, el punto de definición se concentra en la nominación del candidato que la Junta proponga al electorado. El almirante Merino ha declarado que ya no hay tiempo para reformas constitucionales, vale decir, para aceptar modificaciones al actual cronograma de apertura controlada.

El otro elemento que puede interferir en los planes pinochetistas de perpetuación hasta fin de siglo es la actuación de la oposición. La mayoría de los partidos democráticos se encuentran evaluando la situación, lo que se manifiesta en multitud de plenos, juntas, sesiones de comisión política, bilaterales. Mientras este proceso no culmine es difícil pensar en un acuerdo táctico común. El tema central de la reflexión se concentra en el quehacer frente a la ofensiva política del régimen. Detrás de ello está una evaluación del periodo anterior, en el cual el objetivo común era retomar la iniciativa política y provocar la caída del régimen. Si este objetivo, por razones cuyo análisis desborda los límites de este trabajo, no se pudo alcanzar, se hace necesario replantear las estrategias y los objetivos.

Un anhelo mínimo y unitario se expresa hoy en el deseo de la mayoría nacional de impedir la reelección de Pinochet en 1989 y obtener a cambio la ampliación de los espacios democráticos. Este objetivo tiende a ser percibido y asimilado en forma progresiva por la mayoría de los partidos. Donde mayor resistencia encuentra es en el Partido Comunista, dado el carácter radical de su propuesta y la radicalización de buena parte de sus bases, particularmente de su juventud.

La consigna de "elecciones libres" resume parcialmente estas aspiraciones. Se trataría de asumir el reto que lanza el régimen y provocar la movilización de la ciudadanía en torno al tema de la consulta que demuestre los límites del actual marco institucional propuesto y permita una vasta movilización social en torno a un objetivo político: la democratización del país, que posibilite reagrupar el potencial de la oposición en una campaña de desestabilización y apertura democrática, emulando la experiencia filipina. Por cierto, de no definir bien los contornos de la demanda opositora se puede desembocar en una participación que legitime los afanes del gobierno.

En el horizonte inmediato está abierta la invitación que sectores del régimen abren a los partidos centralistas (la democra-

cia cristiana y el partido radical) para que desplacen su interés hacia un acuerdo con la derecha en torno a un futuro sistema político. De operarse esta tendencia, se disolvería el agrupamiento de centro-izquierda que se produjo en los años 1983-1986 y que se expresó en la movilización social de dichos años. Esta tensión explicaría por qué se han acentuado las disputas internas en dichos partidos. En el caso del demócrata cristiano esto se manifestó en la fuerte lucha por la presidencia que sostuvieron Patricio Ailwyn y Ricardo Hormazábal. Si bien el primero resultó el vencedor, Hormazábal agrupó una oposición cercana al 40% de los delegados, con lo cual representa un serio límite para las pretensiones más centristas de la línea que encabeza Ailwyn. En el radicalismo, la pugna originó un nuevo fraccionamiento y la emergencia de dos partidos radicales (uno encabezado por Luis Fernando Luengo y otro por Enrique Silva Cimma).

Es preciso aclarar que no estamos afirmando que los sectores más moderados del PDC y del PR están dispuestos a establecer una alianza con la derecha.²¹ Lo que queremos destacar es que estos sectores ven aparecer la posibilidad de ser una oposición con cierto margen de legalidad a cambio de no cuestionar la validez de la actual Constitución. Por cierto que este propósito se facilitaría de manera importante si, al interior del régimen, se impusiese la candidatura de un civil.

Para la izquierda la situación es difícil. El que mantiene una política más definida es el partido comunista, el cual apuesta a una ruptura institucional, para lo cual está dispuesto a asumir formas de lucha armada. El carácter autoritario del régimen, sumado a la enorme y despiadada exclusión social, le confiere a esta política una amplia audiencia en los sectores más castigados de la población²² pero no logra transformarse en una con-

²¹ De hecho, en las pocas semanas que lleva en ejercicio la nueva directiva democristiana ha reafirmado su carácter de partido de oposición. El 7 de octubre de 1987 se desarrolló un paro nacional convocado por el Comando Nacional de Trabajadores que fue oficialmente respaldado por la dirección de Ailwyn. Al mismo tiempo, en el conflicto que afectó a la Universidad de Chile en septiembre de 1987, es posible observar una activa presencia de los universitarios democristianos.

²² Resulta interesante rastrear cómo el partido comunista ha experimentado una reorientación en sus áreas de crecimiento. No sabemos de estudios al respecto, pero una observación preliminar (*Entrevistas*, Santiago de Chile, junio de 1987) parece indicar que la disminución cuantitativa del proletariado afectó a las bases comunistas, en particular en el sector de la industria de la transformación. (Véase Javier Martínez y Eugenio Tironi B., "Clase obrera y modelo económico. Un estudio del peso y la estructura del

vocatoria que involucre, ni menos hegemonice, a la mayoría de la base social de las fuerzas democráticas.

La debilidad de los restantes partidos contribuye a incrementar la presencia del PC dentro de la izquierda. El socialismo chileno, a pesar del papel aglutinador que significó en sus primeros momentos el ingreso de Clodomiro Almeyda,²³ aún no logra un acuerdo básico de unidad. Los partidos provenientes de la vertiente cristiana (los Mapus y la Izquierda Cristiana) no han alcanzado hasta ahora una dimensión política, orgánica y social que les permita incidir en forma decisiva en debate interno de la izquierda. Una creciente masa de independientes de izquierda, fieles militantes de las organizaciones sociales donde participan pero con un amplio rango de escepticismo respecto a los aparatos partidarios, tiende a crecer.

Mas la conciencia de enfrentar unitariamente el nuevo periodo ha impuesto una tendencia a la concertación izquierdista que se expresa en la constitución del llamado Frente de Izquierda. Se puede criticar que el nuevo agrupamiento tiende a reeditar a la Unidad Popular (con todas sus virtudes y con todos sus límites) pero nadie puede negar que es más amplio que el Movimiento Democrático Popular. Con excepción del Partido Socialista tendencia Núñez, todas las organizaciones izquierdistas han reconocido en el nuevo agrupamiento a su referente unitario. El PS-Núñez asume una posición que pretende construir una mayoría nacional por los cambios, para lo cual considera insuficiente un agrupamiento exclusivamente izquierdista. Por ello, apuesta al futuro, a costa de su aislamiento en el presente.²⁴

proletariado en Chile, 1973-1980”). A cambio de ello el partido conserva fuertes contingentes en el sector de colonos de las periferias urbanas. Al mismo tiempo, la política de los comunistas encuentra una amplia acogida entre la juventud. A lo largo de 1987 ha sido posible observar el asomo de discrepancias de diversos sectores del partido que impugnan la política de violencia aguda, la cual es tenazmente defendida por un sector conocido dentro del partido como “los camboyanos”.

²³ En los días inmediatamente previos a la visita del Papa, el líder socialista Clodomiro Almeyda ingresó clandestinamente al país y se presentó a los tribunales de justicia alegando su derecho a vivir en su propio país. Inicialmente relegado por el gobierno, después se le abrió proceso por diversas causas. Su ingreso provocó una oleada unitaria tanto en las filas del socialismo como de la izquierda en general. Con posterioridad han sido autorizados a ingresar otros miembros de la dirección histórica del socialismo: Óscar Schnake, Aniceto Rodríguez y Jorge Arrate.

²⁴ Esta tendencia recibe su nombre por Ricardo Núñez, su secretario general. La revista *Convergencia*, editada en Santiago, refleja en gran medida las diversas tendencias que se dan en el arco socialista.

Si la izquierda lograra definir una política común frente al tema de las elecciones y sobre esa base ejerciese presión sobre el centro político a través de la acción de masas donde sus bases coinciden con social cristianos y radicales, puede contrarrestar los llamados a la cooptación que el régimen está formulando a estos sectores. Es una posibilidad no descartable aunque de no fácil resolución.

Tres posibles escenarios para el país

Habiendo expuesto los antecedentes en forma sumaria quisiéramos ensayar la construcción de los escenarios más probables. Como siempre ocurre, en ciencia política es difícil establecer tendencias con un cierto grado de confiabilidad, dadas las innumerables variables que pueden alterar el curso de los acontecimientos. Por ello, de manera solamente indicativa, sugerimos tres posibles escenarios para el país.

Escenario I

En un primer caso, estaríamos frente a la candidatura de Pinochet que lograría imponerse, no sin contratiempos, al interior de la cúpula de las Fuerzas Armadas y que obligaría a la derecha a cerrar filas, de buena o mala manera, en torno a la figura del actual gobernante.

Si la oposición no logra estructurar un acuerdo y se debate entre los abstencionistas y las múltiples variantes de participación, crearíase un amplio rango de desinformación y desorientación para su base social, la cual no sabría si hay que inscribirse, no inscribirse, inscribirse para qué, todo ello en medio de una arrolladora campaña oficialista que inhibe y desanima.

Un dato que no hay que olvidar es que Pinochet es un militar que maneja con habilidad el elemento de la sorpresa. Los cálculos y muestreos indican que la derecha tiene relativamente asegurada la mayoría en un electorado que no rebase los tres millones de inscritos.²⁵ Es probable que el régimen, en caso de que la

²⁵ A partir del segundo semestre de 1987 la concurrencia para inscribirse ha aumentado notoriamente; influye en ello la campaña de la Iglesia católica, del partido demócrata cristiano y de la mayoría de los partidos de izquierda.

concurrencia a inscribirse tienda a superar esa cifra, adelante la fecha del plebiscito, dejando a la oposición una vez más atónita. En la actualidad, el gobierno está promoviendo la inscripción electoral sólo entre sus adeptos, sin hacer una campaña especial para el resto de la población. Las recientes elecciones en el Colegio de Profesores (donde votaron varias decenas de miles de maestros) demostró que la derecha logró una adhesión de poco más de un 20% en un sector de asalariados que ha sido particularmente castigado por la política del régimen en estos años.²⁶

Si Pinochet logra reelegirse en 1989, ello provocaría un desánimo enorme en amplios sectores de la oposición. Al mismo tiempo abriría un mayor espacio de desarrollo para la política del partido comunista. Sin embargo, la correlación militar de fuerzas, el grado de desarrollo alcanzado tanto por los aparatos de seguridad del Estado como lo que muestran orgánicamente las organizaciones político-militares y, sobre todo, el eventual marco de un reflujo de masas, nos lleva a pensar que más que un clima de preguerra civil, lo que se desarrollaría sería una “guerra sucia” en la que el régimen tendría los recursos, la experiencia y la disposición para someter a las organizaciones político-militares a una brutal represión.

Escenario II

Otro escenario eventual se concentra en la resolución de las contradicciones internas del régimen a favor de la candidatura de un civil. En este caso se ejercería una particular presión sobre los partidos de centro para incorporarlos al proceso de institucionalización, ofreciéndoles la garantía de que las elecciones no serían fraudulentas y de que se transformarían en la principal

²⁶ En las elecciones del Colegio de Profesores votaron alrededor de 90 000 maestros; el resultado fue:

1) lista democristiana-radical-PS-Núñez	48.1%
2) lista oficialista	25.9%
3) lista de izquierda	24.6%

Un examen de lo anterior lleva a observar que la oposición unida es amplia mayoría. Al mismo tiempo, estas elecciones reflejaron cómo el régimen utiliza a fondo los recursos que le da el poder. Como antecedente cabe señalar que el magisterio fue tradicionalmente un reducto del radicalismo y la democracia cristiana. A comienzos de 1987 varios miles de maestros fueron exonerados de sus cargos y en la gran mayoría de los casos se trataba de militantes y dirigentes izquierdistas.

(y virtualmente única) fuerza de oposición con posibilidad de alcanzar una mayoría parlamentaria en el mediano plazo.²⁷ Con la izquierda se seguiría una política que, por un lado, combinaría una dura represión del FPMR y del PC, privando de derechos políticos a los partidos más representativos del movimiento popular, y por otro, creando un marco de relativa tolerancia para quienes no se involucran en actividades político-militares, tolerancia que se referiría de manera principal a la órbita de las actividades privadas de los militantes izquierdistas. El tratamiento del problema de los exiliados y su retorno es indicativo de ello.

Las fuerzas más interesadas en este escenario las representan en estos instantes los comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea, con un discreto apoyo del general Stange, y si bien aparentemente serían tres votos contra uno en la Junta Militar (instancia que debe designar al candidato), no debe perderse de vista que el Ejército constituye una fuerza cuyo peso político y militar se equipara con creces al de las restantes armas. Detrás de esta alternativa, se encuentran los funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, como ya lo hemos señalado. Una tarea indispensable para operar este escenario es la concertación entre este bloque de fuerzas y algunos partidos políticos. Desde el punto de vista de este sector de las Fuerzas Armadas es vital que los partidos que se involucran en esta estrategia se deslinden de la izquierda y rompan la alianza democrática. No cabe duda que los ojos están puestos de manera principal en la democracia cristiana, y en particular en el predominio dentro de ellos de las opciones más moderadas. Aparentemente la elección de Alwyn contribuirá a estas expectativas pero, tal como lo hemos señalado, en estas primeras semanas de actuación, la nueva directiva democristiana ha respaldado una política de coincidencia con el resto del arco democrático.

De concretarse este escenario, es decir, de llevarse a cabo un viraje de algunos partidos de centro hacia una participación en el sistema político que el régimen busca estructurar después de 1989, podría producirse un quiebre de proporciones imprevisibles en este instante para la oposición, aumentando las recri-

²⁷ De las entrevistas realizadas en Santiago en junio de 1987 se desprende que a los líderes de la oposición quedó claro que esta propuesta va dirigida de manera importante a los sectores no marxistas de la oposición, y por supuesto, a los diversos agrupamientos de derecha hoy existentes.

naciones y suspicacias ya existentes. Sin embargo, las mayores dificultades para construir esta perspectiva se encuentran en la derecha, en particular dentro de las propias Fuerzas Armadas. En efecto, este cuadro supondría la derrota política del general Pinochet en la Junta Militar, pero le aseguraría al conjunto de las Fuerzas Armadas un papel protagónico y una capacidad de veto en el nuevo sistema político. Sería un cuadro donde los institutos armados tendrían legitimado el papel que hoy ejercen los militares argentinos.

Escenario III

El tercer escenario podría estar constituido por una reanimación de la movilización social de la oposición. Para ello se hace necesario lo que hemos ido subrayando a lo largo de estas notas: una política común frente a la ofensiva del régimen. Ello se ve hoy difuso pero no imposible.

En los años del flujo ascendente de la oposición (1983-1986) la izquierda, al igual que la democracia cristiana, se movió tras la búsqueda de un objetivo estratégico: el derrocamiento de la dictadura. Una evaluación de la situación actual y del estado de la correlación de fuerzas indica que el peligro más cercano y probable lo constituye la posibilidad de la reelección del general Pinochet, con lo cual los chilenos tendríamos dictadura legitimada por lo que resta del siglo. Ello obligaría a modificar los objetivos estratégicos: se trataría hoy de colocar como tarea ineludible impedir la reelección del dictador.

Sobre esta base, es posible concertar un nuevo acuerdo al interior de la oposición. De concretarse podría generar una dinámica de masas que desbordara los estrechos marcos de participación que ofrece el cronograma de institucionalización y podría conducir a una situación de ingobernabilidad que forzase a una ampliación democrática.²⁸ En esta línea, la Iglesia católica puede desempeñar un papel de primera importancia como lugar de concertación.²⁹ Lo mismo puede decirse de algunas instancias

²⁸ Los criterios de la estrategia "filipina" argumentan que son otras las condiciones históricas: en Filipinas, las fuerzas armadas estaban divididas, a la movilización social se le sumaba una activa presencia guerrillera y el régimen de Fernando Marcos había perdido toda capacidad de iniciativa política.

²⁹ Es posible comprobar que en tiempos recientes ha cambiado la composición de

sociales, como el Comando Nacional de Trabajadores. Todo ello no puede desconocer el papel que los partidos políticos deben desarrollar para que este proceso alcance su plenitud, dado su papel centralizador de las diversas demandas sociales.

Nadie en la dirección de la oposición está pensando en términos exclusivamente electorales. Sería una ingenuidad de proporciones apostar que el régimen va a permitir un proceso electoral con amplia participación y que se mostraría respetuoso de su resultado. El objetivo que se persigue es volver a poner en tensión al amplio caudal social de la oposición que quedó disgregado en los meses siguientes a la visita papal y responder así con una ofensiva de masas a la ofensiva política de la dictadura. Si la oposición llega a un acuerdo al respecto podría esperarse que en los próximos meses se desatase una creciente movilización opositora que reclame la instauración de la democracia en el país acentuando con ello las contradicciones internas del régimen.

Conclusión

Si algo asombra en la actualidad al observar la sociedad chilena, es el alto grado de disgregación que ha provocado la permanencia de la dictadura y la transformación del capitalismo chileno. En las presentes notas nos hemos concentrado en una observación preferentemente coyuntural, enunciado derroteros posibles a corto plazo a partir del desarrollo del actual proceso. Una reflexión más profunda evidenciaría que la sociedad chilena debe superar varias fracturas que se han ido agudizando en estos años.

Una primera fractura se expresa en el quehacer tan distante entre la intelectualidad y el movimiento social. Chile posee hoy una profunda y activa intelectualidad crítica, parapetada en los

la Conferencia Episcopal. La designación de los nuevos obispos ha privilegiado (por la influencia de la nueva dirección vaticana de Wojtyla) a los religiosos de tendencias más moderadas; si bien subsiste un activo sector de obispos democráticos que se destacaron durante el periodo del cardenal Silva Enríquez, hoy no constituyen una mayoría. Por cierto, no debe interpretarse esto como un giro político de la Iglesia católica que implique el abandono de sus posiciones humanistas y democráticas; se trata más bien de que no ejerce el papel activo de concertación de la oposición que desempeñó en el pasado inmediato.

llamados centros alternativos, donde se guarneció luego de su expulsión de las universidades y del Estado; pero su quehacer se vincula en forma insuficiente con el movimiento social y en forma menos que precaria con los partidos de oposición (con la excepción del PS-Núñez). El inevitable retroceso que, como actores nacionales, experimentan los partidos de izquierda en el marco de la dictadura, genera una autonomización de la intelectualidad que, a su vez, ha debido entrar al mercado para asegurar su subsistencia, dependiendo de una manera preponderante de las fuentes de financiamiento externas. Si bien es abusivo hablar de una intelectualidad poco ligada al movimiento social, porque de una u otra manera todos estos centros mantienen un cierto vínculo con organismos sociales, este contacto no alcanza ni el volumen ni la centralidad que en el pasado unió al pensamiento crítico y al movimiento popular.

Otra fractura aparente es la que el régimen logra situar entre nociones tales como crecimiento económico y distribución social. La profundización de los rasgos capitalistas de la sociedad chilena ha provocado que las leyes del mercado traspasen a fondo la mayor parte de las actividades y sectores del país. El crecimiento, la modernización, el incremento de la productividad, la movilidad social, tienden a justificarse como resultado exclusivo de la competencia y la eficiencia, para lo cual el quehacer social del Estado sería una distorsión. El arco democrático no ha sido capaz de concebir una política de reactivación económica y una estrategia de desarrollo que permita reconciliar lo que el régimen ideológicamente ha tratado de separar: el desarrollo económico y la satisfacción de necesidades sociales.

Lo anterior no es fortuito. Corresponde a una problemática que sería largo y complejo abordar, que incluye las transformaciones del capitalismo en escala mundial y por ende, las tendencias que ello impone a la periferia dejan un estrecho marco de opciones para los países que, como Chile, carecen hoy de condiciones suficientes para enfrentar el desafío que pretende imponerle el primer mundo. No estamos sosteniendo la vieja tesis de que en el trasfondo de este tema está la oposición nación-imperio porque, así de simplificadas las cosas, se disuelven en dicha visión las contradicciones sociales y económicas internas de una sociedad nacional.

El reordenamiento capitalista que Chile ha experimentado

ha acentuado la concentración de la riqueza. Por lo tanto, la experiencia neoliberal de estos años ha sido muy beneficiosa para algunos sectores del país, aunque paralelamente la mayoría de la población ha experimentado un significativo retroceso de sus niveles de vida. El carácter excluyente de este modelo ha conducido a pensar que su implantación supone en forma necesaria la negación de la democracia.

Esto nos lleva a otra fractura ideológica que es preciso superar: la que el régimen intenta imponer en torno al eje democracia-estabilidad social. La sistemática emanación ideológica del Estado chileno apunta a socializar la noción de que la democracia va pareja con el desorden cuando no con el caos social. La dificultad para establecer consensos básicos al interior del arco opositor abona la interpretación que el régimen realiza sobre nuestro pasado reciente. De allí extrae elementos para azuzar el fantasma del retorno al desorden en el caso de que se estructurase un sistema democrático en el país. En este tema, la reflexión de la intelectualidad crítica y el pensamiento que ha orientado a la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, ha avanzado significativamente en estos años, pero a la fecha está aún pendiente la formulación de una propuesta política que la haga viable.

Un tema de permanente postergación en el quehacer de las fuerzas interesadas en la reconstrucción de la nación es el que se expresa en la dicotomía entre defensa nacional y cambio social. Nadie medianamente objetivo puede dejar de observar que las fracturas de la sociedad chilena sólo podrán ser resueltas a partir de profundas transformaciones del actual orden de cosas. Se trata de conciliar una opción por los cambios que la nación necesita con las tareas de la defensa de su integridad. Es un tema viejo, parecido al de cómo provocar la convergencia entre nacionalismo y transformación social. Supone examinar el comportamiento histórico de estas dos vertientes y de las fuerzas sociales que las han encarnado, pero para proyectarlas hacia un Chile que se asoma a un nuevo siglo. Es difícil plantear esta problemática por el enorme abismo que hoy separa a estas dos corrientes, pero es indispensable. Ningún estrategia puede sostener hoy en día que es posible asegurar la defensa de una nación si no se dispone de una relativa integración entre los objetivos nacionales y los intereses mayoritarios de la población, el elemen-

to psicosocial, como lo denomina Golbery de Couto.³⁰ Ningún analista puede dejar de reconocer que en Chile ese elemento está hoy más lejano que nunca de ser alcanzado. No es posible pensar en una defensa exitosa si se carece de una economía capaz de sostener el esfuerzo bélico y no puede apostarse que, para cubrir los déficit, se disponga siempre de subsidios de superpotencias. En el frente externo, desde la Casa Blanca hasta el Kremlin se oyen voces de distancia respecto a Chile; las recientes y fracasadas gestiones con Bolivia demuestran la debilidad del factor diplomático del potencial nacional.

No se puede confiar la defensa de una manera exclusiva al factor bélico si se hace en desmedro de los restantes factores del poder nacional.

Estos últimos elementos escapan al análisis coyuntural que ha permeado lo fundamental de estas notas; por lo mismo constituyen más una invitación a la reflexión que una aseveración tajante. Los chilenos tenemos en este fin de siglo una tarea difícil, un desafío de proporciones, pero, tal como lo subrayábamos, ineludible.

³⁰ Nos referimos a la elaboración del mariscal brasileño Golbery do Couto Silva, uno de los principales teóricos de las doctrinas de seguridad nacional.

Chile: la ofensiva política de la dictadura

Author(s): Gabriel Gaspar Tapia

Source: *Estudios Sociológicos*, Jan. - Apr., 1988, Vol. 6, No. 16, Elecciones en Mexico (Jan. - Apr., 1988), pp. 179-203

Published by: El Colegio de Mexico

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/40419964>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



El Colegio de Mexico is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Estudios Sociológicos*

JSTOR